

«Manipulación de la Ciudadanía»

Jaime URCELAY

No consta públicamente—al menos hasta el día en que se escriben estas líneas—que FERE-CECA, organismo de Derecho Pontificio y personalidad jurídica propia, integrado por los Superiores de los Institutos Religiosos y de las Sociedades de Vida Apostólica que se dedican a la educación, con casi dos mil centros educativos asociados, haya expresado su postura oficial sobre los contenidos curriculares de la asignatura que ya se conoce como «Manipulación de la Ciudadanía».

Esta falta de pronunciamiento oficial, que en todo caso podría suplirse por las fuertes y nitidas críticas de la jerarquía católica a la asignatura, hace difícil entender el sentido de la columna que con el título «No en nuestros centros» ha publicado Manuel de Castro, secretario general de FERE-CECA, en el periódico profesional de educación «Escuelas» (núm. 3725, de 16/11/06).

Y es que en dicho artículo se sostienen tres tesis que tienen una gran trascendencia, dado el cargo de quien las afirma, y que, desde el respeto personal a Manuel de Castro, no podemos compartir.

Primera tesis del secretario general de FERE-CECA: el currículo diseñado por el MEC «cumple el requisito» de no incluir «cuestiones que afectan a la moral personal sobre las que la sociedad no tiene un criterio compartido, libberándose, así, la asignatura de la acusación de adoctrinamiento».

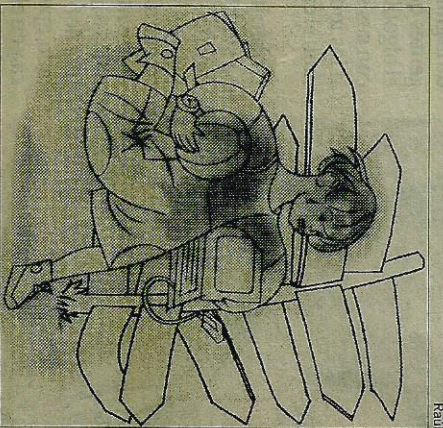
¿No son acaso «cuestiones que afectan a la moral personal» la «condición humana», la «identidad personal», la «construcción de la

conciencia moral», la «educación afectivo-emocional» o el igualitarismo aplicable a unas supuestas «orientaciones afectivo-sexuales» de libre elección, entre otros temas abordados en el currículo de la asignatura?

¿Podemos aceptar como «criterio compartido» por la sociedad—incluidos, por lo tanto, los padres católicos—que las mencionadas cuestiones se resuelvan, como hace la asignatura, desde el relativismo ético, la omisión de la posibilidad del ser humano de conocer la verdad y el bien o el establecimiento del consenso y la legislación de cada momento como último referente ético?

¿No es adoctrinamiento imponer obligatoriamente a los niños y jóvenes de entre 10 y 18 años un fundamento de las cuestiones morales cerrado al hecho religioso y al papel de la inteligencia y la voluntad y basado en un subjetivismo consensualista guiado por las «relaciones afectivas con el entorno»?

Segundo posicionamiento de Manuel de Castro: no solamente no comparte «la opción de quienes abogan por plantear la objeción de conciencia contra la Educación para la Ciudadanía», sino que, además, «no



Raúl

ve posible que dicha objeción de conciencia pueda plantearse en los centros católicos».

¿Por qué no es posible que los padres con hijos en centros católicos ejerzan un derecho democrático, reconocido en la Constitución española, como es la objeción de conciencia, indisoluble de la libertad ideológica?

¿Quién elige ante un conflicto real entre la norma y la propia conciencia? ¿El secretario general de FERE-CECA o los padres de familia que tienen el derecho y la responsabilidad de educar a sus hijos según sus propias convicciones? La formidable respuesta que estamos obteniendo de los padres y las APA de toda España con la difusión de la «Guía para la Objeción de Conciencia» parece indicar lo segundo.

Tercera y última tesis: «Quienes libremente eligieron el colegio católico para educar a sus hijos deben aceptar que, tanto por la selección del libro de texto como por la del profesor que la imparta, la Educación para la Ciudadanía será un elemento más de la formación integral según nuestro proyecto educativo».

¿Hasta dónde cree Manuel de Castro que el MEC o las comunidades autónomas ideológicamente más sesgadas van a consentir, teniendo en su mano la poderosa arma de los conciertos, que los colegios católicos—¡preci-

samente los colegios católicos!—se aparten de la doctrina oficial y legal en torno a la llamada «homofobia» o la concepción laicista de la ciudadanía y la convivencia democrática?

¿Cómo conseguir una formación integral según el proyecto educativo católico cuando a los alumnos se les va a enseñar que cada uno se constituye, de manera autónoma, su propia conciencia moral y por otro lado se les enseñará que existen una verdad y un bien objetivos y reconocibles en la naturaleza humana, obra de un Dios creador? ¿Qué enseñarán los colegios católicos: que «la libertad nos hará veraces», como sostienen Zapatero y sus filósofos ilustrados, o que «la Verdad os hará libres», como afirmó Jesús de Nazaret?

¿Qué «formación integral» espera a los alumnos de los colegios católicos cuando el 70% de los niños y jóvenes de su generación van a ser adoctrinados en unos centros públicos donde las posibilidades de reconducción de la asignatura son prácticamente nulas, salvo que sus padres ejerzan la objeción de conciencia?

Ojalá todo haya sido otro de los malentendidos—el Gobierno ha sido especialmente hábil en procurarlos—de la «Manipulación de la Ciudadanía» y Manuel de Castro rectifique lo que es preferible entender como un juicio precipitado. En juego están la Libertad y el Bien Común, cuya defensa frente a esta agresión va a suscitar una amplia movilización social en la que los colegios católicos pueden y deben estar en la vanguardia.

Jaime Urcelay es presidente de Profesionales por la Ética